

ro de Distrito de esta ciudad, por el ciudadano José Quero, contra el Ayuntamiento de la misma, por la orden relativa á segar las excavaciones hechas en lo que se llamó Iglesia nueva del Cármen, con cuya orden se han violado, segun el quejoso, las garantías que consigna el artículo 16 de la Constitución federal; y considerando: que el Ayuntamiento al dictar la orden, procedía dentro del círculo de sus atribuciones, dándola por escrito, fundando y motivando la causa de ella; así como, que por lo mismo el quejoso no ha tenido razon para solicitar el amparo; por lo expuesto y en virtud de lo que previene el artículo 101 de la misma Constitución se decreta:

1º Que se confirma la sentencia pronunciada por el Juez 1º de Distrito de esta ciudad, en la parte que declara, que la justicia federal no ampara al ciudadano José Quero contra la orden mencionada.

2º Que se confirma igualmente en la parte que condena á Quero, al pago del *mínimum* de la multa que impone el artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869.

3º Devuélvanselas actuaciones al Juzgado de Distrito de esta ciudad, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos, respecto del pñrimer punto, y por mayoría respecto del segundo, los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos mexicanos, y firmaron.—(Firmados.)—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Enero treinta de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido por D. Manuel Godoy ante el Juzgado de Distrito de Guajuato por violacion en su persona del artículo 8º de la Constitución federal.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR.

C. Juez de Distrito:

El promotor fiscal dice: que el C. Manuel Godoy, segun su ocurso expresa y consta del certificado de la escritura de arrendamiento del abasto de carnes, celebrado por el ayuntamiento de esta ciudad en seis de Marzo último, con D. Lorenzo Marmolejo, es fiador de este último, por las obligaciones que contrajo en la escritura expresada. Entre estas obligaciones se le consignó la de pagar mensualmente la suma de cien pesos, importe de la contribucion federal que causaba el arrendamiento conforme á lo prevenido en la ley de 16 de Diciembre de 1861.

Consta igualmente del ocurso del interesado, que éste ocurrió al administrador de papel sellado en 10 de Julio último, pidiéndole declarara: que el arrendamiento del abasto de carnes estaba comprendido en las excepciones que para el pago de la contribucion federal se les otorgó á algunos ramos en la circular de 26 de Enero de 1869: y que en caso de no tener las facultades necesarias, elevara el ocurso á quien correspondia para la resolucion de la duda de ley. Como resultado de esta solicitud, dice el mismo interesado, se le comunicó una resolucion del ministerio de hacienda, manifestándole que el gobierno no accedía á la excepcion del pago que pedía el contratista.

El ciudadano administrador del papel sellado, por su parte, ha expuesto: que satisfecho del adculo de Marmolejo, y despues de haber dado curso á la solicitud de que se ha hecho mérito, y hécíhosele saber el resultado de ella al solicitante, en uso de las facultades que le otorga la ley de 20 de Enero de 1837 libró el requerimiento y des-

pues el mandamiento de embargo que motivaba la queja de D. Manuel Godoy.

En la iniciación del presente juicio, la parte actora expone el caso como comprendido en la frase. 1ª art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, por que un acto, según su opinión, que ha ejercido ó trata de ejercer el administrador del papel sellado, infringe en su perjuicio las garantías otorgadas por la Constitución federal en su art. 8º

Del análisis que este ministerio fiscal ha hecho de las razones y hechos expuestos por el solicitante y por el administrador del papel sellado, encuentra que no hay infracción de garantías la mas leve, y que aceptado el que la hubiere, no puede ser ocasionado por el acto de embargo que ha ejercido el funcionario de quien el solicitante se queja.

Consta por el dicho mismo del C. Godoy en su primer escrito, que el Ministerio de Hacienda, á quien se elevó el recurso en que solicitó la aclaración de la ley, proveyó á él y le hizo saber su resultado; con esto solo, en opinión de esta promotoría fiscal, quedaba obsequiado el precepto constitucional consignado en el artículo 8º citado arriba. Ni al peticionario se le coartó en manera alguna su derecho de petición supuesto que hizo la que deseaba, y se proveyó y se le comunicó lo provido según confiesa. Norabuena que el interesado no se conforme con esta resolución, ya porque su pedido se entendiera mal, ó ya como dice, porque la aclaración le correspondía hacerla al Congreso de la Unión y no al Ministerio; pero esto, cuando mas daría motivo á repetir el recurso ó á dirigirlo á la autoridad á quien correspondiera, pero nunca á iniciar un juicio de amparo, supuesto que la autoridad á que se acudió observó fielmente el precepto constitucional.

No será fuera del caso llamar la atención del juzgado sobre que, la aclaración que ha pedido el C. Godoy no es de ley, sino del contenido de una circular.

Al aceptar el contratista del abasto de carnes, en la escritura de arrendamiento,

la obligación de pagar la contribución que causara su contrato, con arreglo á la ley de 16 de Diciembre de 1861, es porque estaba convencido de que conforme á lo preceptuado por esta ley, el arrendamiento del abasto de carnes causaba la contribución federal; la duda, pues, consiste en saber si el arrendamiento en cuestión estaba comprendido en las tres excepciones que marcó la circular de 26 de Enero de 1869. La aclaración, por consiguiente, debe ser de esta circular.

Supuesto lo dicho, debo tenerse presente: que las circulares son precisamente órdenes aclaratorias y reglamentarias de las leyes, que toman su origen del ejecutivo, y que por consecuencia, es á este poder y no al legislativo de donde no emanan, al que corresponde dar su aclaración en todos casos; de manera, que el administrador del papel sellado obró acertadamente al elevar la solicitud repetida al Ministerio de Hacienda, no pudiéndose por tanto, decir que por no habérsele dado la dirección debida, puede considerarse sin provido el recurso.

Lo expuesto, parece que justifica muy cumplidamente, que la garantía invocada por el C. Godoy, no ha sufrido en perjuicio de este violación alguna; pero, como se dijo arriba, suponiendo esta violación muy bien probada, de ninguna manera habria sido ocasionada por la ejecución que la oficina del papel sellado mandó practicar. No se puede alcanzar, por qué se diga, que este acto fuera causa de que el Ministro de Hacienda ó el Congreso de la Unión, en su caso, dejaran de proveer en un recurso.

Es cierto que ni el embargo, ni aun el pago de la suma reclamada tendria lugar, si por la autoridad correspondiente se declarara que el arrendamiento del abasto de carnes estaba dispensado de pagar la contribución federal; esto quiere decir, que en este caso, las consecuencias, los efectos de la ley tendrian esta modificación, pero nunca que la aplicación de la ley influyera en que tuviera ó no lugar un acto absolutamente independiente de ella.

Que el acto que motiva la queja del C. Godoy, es el embargo que decretó en su contra la Administracion del papel sellado, consta del mismo escrito en que solicitó su suspension.

El promotor fiscal, cree que lo que lleva dicho y la lectura de algunas de las piezas principales de los autos, es lo suficiente para que el fácil criterio del juzgado decida la cuestion, y aplique la ley con la precision que lo está pidiendo la narracion sencilla de los hechos; sin que haya necesidad de abrir término de prueba, porque en su concepto, no hay punto alguno que haya de aclararse.

Por tanto, este ministerio fiscal pide al juzgado, que con fundamento de lo que deja expuesto, se sirva declarar: 1º que la justicia federal no ampara al C. Manuel Godoy, contra el C. administrador del papel sellado, que ha proveído un auto de embargo en usode sus facultades, porque con este acto no infringe, en perjuicio del expresado Godoy, las garantías que consigna la Constitucion federal en su artículo 8º: 2º que el C. Godoy ha incurrido en la multa que impone la ley de 20 de Enero de 1869, artículo 16; pues todo ello procede de justicia que protesta con lo necesario. —Guanajuato, Diciembre catorce de mil ochocientos setenta. —(Firmado). — *Zenon J. de Velasco.*

#### *Sentencia del Juez de Distrito.*

Guanajuato veintiocho de Diciembre de mil ochocientos setenta.

Visto el presente juicio de amparo que promovió D. Manuel Godoy, contra la Administracion de papel sellado de esta capital por creer violada en su persona la garantía que consigna el artículo 8º de la Constitucion federal, referente al derecho de peticion; y apareciendo que el quejoso se ha desistido del recurso que intentó, por cuya razon carece ya de objeto este juicio; con fundamento de lo que previene el artículo 2º de la ley de 20 de Enero de 1869, el juez que suscribe, declara: que es de so-

bresearse y se sobresee en estas diligencias, dándose á la parte de D. Manuel Godoy por formalmente desistida á su perjuicio del presente recurso. Notifiquese este auto á las partes, publíquese en el periódico oficial del Estado, y previa la correspondiente citacion, remítase el expediente á la Suprema Corte de Justicia para los efectos legales. Así el C. Juez de Distrito lo decretó y firmó: doy fé. —(Firmado). — *Albino Torres.* — *Luis G. Medina.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Enero veinte de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido por el C. Manuel Godoy, ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato, contra el C. Administrador de la renta de papel sellado del mismo Estado, quien dispuso se cobraran al C. Lorenzo Marmolejo, ochocientos pesos que adeuda de contribucion federal, como contratista del abasto de carnes de la capital del Estado, de cuyo juicio se desistió el C. Godoy en 23 de Diciembre último, pidiendo que por lo mismo se dé por concluido y terminado, y considerando: que segun el artículo 2º de la ley de 20 de Enero de 1869, los juicios de amparo se siguen á peticion de parte; y por consiguiente, que desistida la que solicita amparo, no debe continuarse el juicio: por lo espuesto y con fundamento de lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta: que se confirma el auto pronunciado por el Juez de Distrito de Guanajuato el 23 de Diciembre último, que mandó sobreseer en el juicio mencionado.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia de este auto para los efectos consiguientes, y archívese á su vez el Toca.

Así, por unanimidad de votos, lo decretaron los CC. presidente y ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia, de los Estados-Unidos

mexicanos, y firmaron.—(Firmados.)—*P. Ogasón.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—J. M. Lafragua.—P. Ortaiz.—Ignacio Ramírez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Aza.—S. Guzman.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis N. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Febrero 6 de 1871.  
—*Agustín Peralta*.—Oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido por los CC. Angel M. Domínguez, Leon Covarrubias, Jesus M. Guerra, José G. Terán y Lic. Francisco Villaseñor, contra el decreto número 14, expedido por la H. Legislatura de Querétaro en 4 de Julio de 1870, en el que se declararon insubsistentes las elecciones de Diputados propietarios y suplentes, verificadas en el Distrito del centro, por creer violadas las garantías individuales que otorgan los artículos 14, 20, 21, la fracción segunda del artículo 35, el 40 y 109 de la Constitución general de la República.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que es muy grave el punto sometido á la decision de vd.; porque con ocasion de él, se encuentra en la necesidad de fijar el sentido de una de las mas importantes atribuciones que el código fundamental le concede, cual es: la de mantener á salvo las garantías individuales, de toda ley ó acto de autoridad que las vulnere.

En el caso presente hay nada menos que saber, si la mayoría de la Legislatura del Estado de Querétaro, al declarar nulas las elecciones de la minoría, que le es adversa, obró dentro del círculo de sus facultades; y en caso negativo, si los Tribunales de la federacion deben reparar este acto ilegal.

No cabe la menor duda respecto de la injusticia del decreto de la Legislatura, y

el Promotor confieza con pena cuanto sobre este particular han probado los quejosos; con tanto mas motivo, cuanto que el mencionado cuerpo ha desdoblado el enviar copia de los documentos que pudieran servir de base para su defensa en esta parte.

Comprende el Promotor, que no es fácil presenciarse con indiferencia una arbitrariedad, cualquiera que sea el poder de donde emane, pero tambien reflexiona que el interes que inspiran los derechos conculcados debe desaparecer delante de consideraciones mas elevadas que afectan al mantenimiento de los principios constitucionales que se refieren á la soberanía ó independencia de los Estados. Por lo que cree imposible amparar á la minoría electa contra el decreto de la mayoría constituida en Legislatura, sin lastimar esos principios, abrogándose la prerogativa que esta posee legalmente para deslindar las dudas que ocurran sobre las elecciones de sus miembros. (Constitucion del Estado de Querétaro art. 40.)

Siguiendo el uso muy comun entre nosotros, de acudir á las doctrinas de los publicistas que han estudiado la Constitucion Norte Americana, el promotor está convencido de que ya desde el siglo pasado estaban preocupados los estadistas de esa nacion, por actos semejantes al de la Legislatura, de Querétaro sin que por eso les hayan puesto el remedio conveniente.

En el número 51 del "Federalista" se leen las siguientes espresiones del presidente James Madison. "En las Repúblicas, dice, es sumamente importante, no solo defender la sociedad contra la opresion de los que la gobiernan, sino tambien resguardar una parte de la sociedad contra la injusticia de la otra. La justicia es el blanco á que debe visar cualquier gobierno, y el objeto que se proponen los hombres recurriéndose. Los pueblos han hecho y harán siempre esfuerzos hácia este intento, hasta que hayan logrado alcanzarlo ó perdido su libertad.

Si existiese una sociedad en la cual el partido mas poderoso se hallase en estado